

Entrevista a Rosario Goñi, Delegada de Economistas sin Fronteras Euskadi

1.- A nivel global y también local, en la C.A. de Euskadi, ¿cuál es la evolución de la desigualdad y sus consecuencias?

La evolución de la desigualdad va en aumento, eso es una realidad que no se puede rebatir. Todos los indicadores lo muestran, tanto a nivel global como a nivel local.

A nivel global, si tenemos en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que publica Naciones Unidas, considerando no sólo la renta per cápita sino también factores de salud, educación, ambientales y sociales y que ha venido reflejando datos positivos hasta ahora, nos ofrece unos datos preocupantes. Por primera vez en los últimos años es posible que la población por debajo del umbral de la pobreza se incremente a consecuencia de la Covid-19. Desde 1991 en que se inicia el cálculo de este Índice es la primera vez que el IDH medio global disminuye. Por otro lado, es imprevisible saber cómo afectará la guerra de Ucrania a este respecto. Con el desastre de este conflicto bélico no podemos cuantificar cómo va a afectar a la desigualdad, pero lo hará sin lugar a dudas de una forma notable. Las desplazadas son cientos, en su mayoría niñas y niños, mujeres y personas de avanzada edad, todas ellas personas muy vulnerables que sufren de forma más cruenta la violencia económica.

A nivel global, los efectos de la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza son imprevisibles en una Europa sacudida por una guerra en su propio suelo, pero como en el caso de las consecuencias de la Covid-19, mientras los efectos sobre las personas vulnerables son rigurosos, las personas más ricas siguen enriqueciéndose, incluyendo empresas que han tenido beneficios extraordinarios, como las farmacéuticas y, previsiblemente, en un futuro próximo las armamentísticas.

Las distintas crisis que vamos sufriendo se van superponiendo una sobre otra. La crisis medioambiental, la Covid-19 y el monopolio de las vacunas, la guerra y su derivada económica. Las más vulnerables sufren esta crisis global que presenta tantas aristas que pocas personas salen ilesas.

A nivel más local en el Estado español, con datos del avance del *XI informe: El Estado de la Pobreza en España 2021*, se puede apreciar un grave incremento de la Privación Material Severa que pasa de 4,7% a 7% en un año, lo que viene a indicarnos que en el Estado español hay 3,3 millones de personas que sufren esa carencia severa en su vida cotidiana. Otro dato preocupante es que se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, pasando del 7,8% al 10% de la población, lo que supone que 4,7 millones de personas viven con dificultades. Otros indicadores como la tasa AROPE también es mala, pues pasa del 25,3% al 26,4%, al igual que el riesgo de pobreza que aumenta tres décimas, llegando hasta el 21% de la población española. Todo esto teniendo en cuenta que en esta crisis se han implementado medidas importantes como el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del salario mínimo y otras medidas sociales como la suspensión de desahucios, la garantía de suministros o los ERTes.

En cuanto a Euskadi, no es ajeno a esta situación global. Aunque la tasa AROPE, por ejemplo, mejora respecto a 2019 pero sin llegar a los datos de 2018, sin embargo, en cuanto al riesgo de pobreza que venía disminuyendo desde 2015 aumentó en 2019 y se

mantiene en el 2020, y destaca el dato del aumento en un punto y medio la carencia material severa entre 2019 y 2020.

También me parece interesante, viendo los datos del Eustat, que aunque las personas con privaciones materiales graves han ido disminuyendo, las personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales han ido aumentando desde 2016. Nos alejamos de los objetivos con los indicadores de la Agenda 2030 en cuanto a la proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos considerando tanto la mediana nacional como la autonómica.

Está claro que lo que se está haciendo va por el buen camino, pero no es suficiente. No cabe duda de que hay que seguir trabajando.

2.- Desde Economistas Sin Fronteras, ¿qué estáis haciendo y que pedís que se haga?

Desde EsF focalizamos nuestra actuación en el objetivo 10 de los ODS, concentrándonos en la reducción de las desigualdades. Esto lo hacemos contribuyendo a la divulgación teórica y a la puesta en práctica de otras formas de hacer y entender la economía, promoviendo y apoyando la responsabilidad social y la ética de los diferentes actores económicos, fomentando la economía social y solidaria y generando una ciudadanía global, crítica y comprometida.

En concreto, trabajamos con jóvenes, profesorado de Formación Profesional y Universidad, profesionales de la economía y con ciudadanos y ciudadanas interesadas en contribuir a una economía más justa, desde una relación de colaboración abierta a sus propuestas e inquietudes para impulsar una conciencia de ciudadanía global. Para ello, organizamos acciones como jornadas, charlas, cursos formativos, tutorización de TFG/TFM, investigaciones, elaboración trimestral de un Dossier monográfico o cineforos, entre otros.

Así mismo, fomentamos procesos de empoderamiento económico, especialmente de mujeres y migrantes, a través de asesoramiento, formación y acompañamiento personalizado para el emprendizaje social.

El trabajo de incidencia política y movilización ciudadana lo hacemos, principalmente, con nuestra participación activa en diversas redes. En la actualidad, estos esfuerzos se canalizan a través de la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas (Finantzaz Haratago) donde somos una de las organizaciones impulsoras; Saretuz, Red por el Consumo Consciente y Transformador de Donostia, donde asumimos la presidencia; la Plataforma UKS (Unibertsitate Kritikoa Sarea) que tiene como objetivo que la comunidad universitaria participe de una política comprometida con la justicia social y la sostenibilidad; la Comunidad de Economía Sostenible del Colegio Vasco de Economistas o el talde de transición económica y energética impulsado por el Gobierno Vasco en el marco de la estrategia Agenda 2030, entre otras

Nuestro equipo de voluntariado en EUSKADI realiza una gran labor de apoyo, coordinación y reflexión interna, además de la participación en muchas otras Redes y espacios en los que volcamos nuestras reivindicaciones.

- Grupos de trabajo de la Coordinadora de ONGD Euskadi: Educación para la Transformación Social, Coherencia de Políticas, Presupuestos, Incidencia Política y ODS.
- Consejos de Cooperación municipales
- Plataforma por la Justicia Fiscal de Euskadi.
- Organización de los Cafés Sostenibles, con coloquios entre entidades.
- Redacción de artículos para diversos medios de comunicación.

Para más información, disponemos de un [boletín mensual](#) en el que enviamos la información relevante para Euskadi

3.- ¿Cómo valoráis desde Economistas Sin Fronteras la Iniciativa Legislativa Popular para una Renta Básica Incondicional en Euskadi - <https://rentabasica.eus/es/> -?

Desde Economistas si Fronteras, valoramos de forma muy positiva la Iniciativa Legislativa Popular. Una Renta Básica Incondicional, nos parece una herramienta muy sólida para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Es un instrumento que incide de forma directa en la redistribución de la riqueza. Aunque en Euskadi contamos una RGI envidiada en otras autonomías del Estado español, no termina de conseguir sus objetivos y se han detectado y puesto en conocimiento de los implicados en su gestión, los muchos problemas que presenta. Es por ello que nos parece que dar el paso a una RBU es necesario, creemos que es un instrumento más eficaz para erradicar la pobreza que las Rentas condicionadas.

Si se desea apostar por un sistema de protección social que aliente una sociedad cohesionada, inclusiva y que proporcione recursos para vivir con dignidad a toda la ciudadanía, hay que hacer una transformación total del sistema que tenemos en la actualidad con la RGI. Necesitaría una reforma muy profunda que en este momento no se plantea. El gran problema es que no se tiene intención de hacer una reflexión sobre la individualización de las prestaciones. Se habla de hogares y no de personas.

Simplificar los trámites para su acceso y la ampliación a colectivos que en este momento no están percibiendo efectivamente la RGI o el IMV, son problemas que no tienen visos de solucionarse. El establecimiento de una RBU podría ser la clave para dar respuesta a todos los problemas que se advierten y que ni la RGI ni el IMV terminan de solucionar.

También vemos de forma positiva los previsible cambios que se producirían en el mercado laboral con implantación de una RBU. Una mayor capacidad de negociación para las personas asalariadas permitirá llevar más democracia al mercado laboral tan necesitado de ella. Creemos que dará facilidad para emprender y formarse, posibilitará la conciliación mejorando el reparto del trabajo, de todo el trabajo, tanto productivo como el reproductivo y el de cuidados.

Su efecto en la vida de las mujeres también nos parece que tiene más luces que sombras. Al ser una renta individual se empodera de forma decisiva a las mujeres dentro del hogar, posibilita su acceso a la educación y con ello al mercado laboral.

A pesar de las dificultades de su puesta en marcha, consideramos que ofrece muchas más ventajas que posibles efectos colaterales negativos. Su implantación o no, se debe a voluntad política.

El posicionamiento de Economistas sin Fronteras Euskadi sobre la RBU puede descargarse [aquí](#)